

Honduras: Cincuenta años de industrialización incipiente y crisis de la deuda externa, 1949-1998

Luis Manuel Martínez Estrada¹

Recibido: 30/11/2024

Aceptado: 14/04/2025

RESUMEN

1

Este artículo se circunscribe en la implementación del capitalismo desarrollista «hacia adentro» en Honduras, teniendo como objetivo general analizar el período entre la caída de la dictadura de Tiburcio Carías Andino en 1949 y el paso del Huracán Mitch en 1998, destacando la adopción de las políticas neoliberales más profundas en los últimos años. Así pues, se verifican los claroscuros del desarrollismo, sus actores y dinámicas, que a su vez permitieron el surgimiento e implementación del neoliberalismo en Honduras a fines del siglo XX. Este trabajo es resultado de un estudio cualitativo y analítico en el que se realizó una revisión documental en el campo de la sociología histórica en América Latina, Centroamérica y más específicamente Honduras.

Palabras clave: Desarrollismo, Honduras, Deuda Externa, Industrialización y Estado.

¹ Docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-Cortés). Maestría y Licenciatura en Sociología, con especialidades en: Democracia y Gobernabilidad, Teoría y Práctica en Sistemas Familiares y Cultura de Paz. Coordinador para Mesoamérica del Grupo de Trabajo, Fronteras, Regionalización y Globalización de CLACSO. Coordinador de la Red Nacional de Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Coordinador del Grupo de Investigación Científica sobre Desarrollo Territorial con Identidad Cultural de la Dirección de Investigación Científica Humanística y Tecnológica (DICIHT). Ha publicado en revistas científicas y libros nacionales e internacionales y ha sido ponente en temas relacionados con movimientos sociales, cambio climático, identidades, violencia, extractivismo y globalización. email: lmartineze@unah.edu.hn. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4316-9351>.

Honduras: Fifty years of incipient industrialization to the foreign debt crisis, 1949-1998

ABSTRACT

This article focuses on the implementation of inward-looking developmental capitalism in Honduras. Its general objective is to analyze the period between the fall of the Tiburcio Carías Andino dictatorship in 1949 and the passage of Hurricane Mitch in 1998, highlighting the adoption of the most profound neoliberal policies in recent years. It thus examines the dark sides of developmentalism, its actors, and dynamics, which in turn allowed for the emergence and implementation of neoliberalism in Honduras at the end of the 20th century. This work is the result of a qualitative and analytical study that included a documentary review in the field of historical sociology in Latin America, Central America, and Honduras, more specifically.

Keywords: Developmentalism, Honduras, External Debt, Industrialization, State.

Introducción

Este artículo refiere el modelo de acumulación capitalista de industrialización por sustitución de importaciones, implementado fundamentalmente en América Latina a partir de la década de 1950, como una respuesta a la necesidad de promover el crecimiento económico, así como la independencia industrial. En este escenario, se analiza su implementación en el caso de Honduras, con énfasis en su tradición teórica, desarrollo y colapso, así como en las condiciones heredadas para la posterior implementación del neoliberalismo, debido a la crisis de la deuda externa y los intereses transnacionales en la región.

Es preciso señalar que 1949 se convirtió en un año paradigmático en la historia de Honduras, ya que en este año dimitió el dictador Tiburcio Carías Andino de la presidencia, quien por 16 años gobernó el país. Dicho mandato, según Barahona (2005), constituyó un período que sostuvo los intereses transnacionales de las compañías bananeras norteamericanas en el contexto de la Gran Depresión iniciada en 1929. En simultáneo, con la caída del régimen surgía un nuevo modelo

económico que era implementado por intereses externos y una incipiente fuerza social y política interna que deseaban cambios en términos del Estado y sus funciones políticas y socioeconómicas.

Así como 1949 fue un año emblemático, también lo fue 1998, debido a que en ese año el fenómeno natural denominado huracán Mitch afectó significativamente la infraestructura económica y productiva nacional, ocasionando más de 16 mil muertes en Centroamérica. Por otra parte, FOSDEH y ASONOG (1998) indican que para la fecha ya se habían implementado casi en su totalidad las medidas neoliberales en el país. No obstante, la deuda externa que era impagable y la calamidad humanitaria permitieron a los organismos internacionales incorporar a Honduras a la iniciativa para países altamente endeudados, conocida por sus siglas en inglés como HYPC; tal inserción condujo a que a inicios del siglo XXI parte de esa deuda fuese condonada.

Cabe señalar que este tipo de estudios casi siempre se sustentan desde las teorías centro-periferia y de la dependencia, esto debido a su potencial crítico. De hecho, en el presente artículo se reúne a algunos de sus teóricos; no obstante, se incorporan algunos otros contemporáneos como Dahrendorf, Robinson y Popitz para dinamizar los factores externos del capitalismo transnacional, las implicancias del poder y los conflictos más allá de las clases sociales presentes en el desarrollo e implementación de las medidas desarrollistas y en menor medida neoliberales del lapso estudiado.

1. Hacia una aproximación teórica del desarrollismo en América Central y Honduras

Desde el enfoque del desarrollo social, son múltiples los autores que han analizado la problemática de la implementación de los modelos de desarrollo capitalista en América Latina. Durante la segunda mitad del siglo XX se han constituido en gran medida como los principales teóricos del capitalismo en la región. A su vez, en Centroamérica surgió una generación de analistas desde el área de la economía y en menor medida la sociología, pero en el caso de Honduras fueron inicialmente los economistas quienes hicieron los principales aportes a este campo de estudio; además de ellos, sobresalen algunos historiadores y trabajadores sociales que posteriormente dieron luces sobre todo en la cuestión agraria y los movimientos sociales de la época.

Para comprender con mayor propiedad una definición de este modelo, resulta necesario partir de la teoría centro-periferia en el marco del estructuralismo latinoamericano y las propuestas de la CEPAL,

liderizadas por el economista argentino Raúl Prebisch y otros investigadores agrupados en esta institución en las décadas de 1950 y 1960, ya que a partir de esta explicación sobre el subdesarrollo latinoamericano se propone como estrategia el modelo de desarrollo hacia adentro y la industrialización por sustitución de importaciones.

Para Posas y Navarro (2013), el elemento central de la teoría centro-periferia o del estructuralismo latinoamericano gira en torno a su conceptualización del sistema internacional capitalista, como un todo integrado por relaciones asimétricas entre centro y periferia y el deterioro de los términos de intercambio, dada la tendencia secular decreciente de los precios de los productos básicos generados en los países subdesarrollados. En el contexto de esta teoría, se da el nombre de centro a los países altamente industrializados y de periferia a los países subdesarrollados.

Los países de la periferia exportan principalmente materias primas o productos básicos a los países industrializados, mientras que los países del centro exportan bienes manufacturados a los países subdesarrollados. Los estructuralistas sostenían que estas relaciones de intercambio eran desfavorables para los países de la periferia, debido a la desigual relación entre los precios de los productos que se intercambian, ya que mientras que los precios de los productos agrícolas y mineros secularmente tienden a la baja, los de los productos manufacturados se mantienen estables o tienden al alza. Esta asimetría en los precios internacionales se traduce en el deterioro de los términos de intercambio, en los países subdesarrollados (Posas y Navarro, 2013).

A grandes rasgos, el modelo aplicado en América Latina y en especial en Honduras, en la década de 1950, teóricamente buscaba fomentar el crecimiento económico a través del aumento de la producción nacional y la sustitución de importaciones. De forma más específica, Prebisch (1963) lo definió como un esfuerzo por desarrollar la industria nacional con base en políticas proteccionistas a la producción interna y la promoción de la inversión en infraestructura y sectores industriales clave. En consonancia, Furtado (1966) estima que buscaba fomentar el crecimiento económico a través de la industrialización, con el sector público como principal motor de la economía.

En ese sentido, se resaltan algunas de las características del modelo, tales como: la protección a la producción nacional, inversión en infraestructura en sectores clave y un papel dominante del sector público en la economía, como se señaló anteriormente. En contraparte, Gunder Frank (2005) consideraba que el modelo de industrialización

por sustitución de importaciones es un intento de imitar el crecimiento económico de las economías industriales avanzadas, mediante la protección a la producción nacional y la promoción de la inversión en la industria.

En definitiva, cada autor posee su propia perspectiva y crítica sobre el modelo, así como su impacto en el desarrollo económico de América Latina. Al igual ocurrió en América Central, mientras que en Honduras las corrientes reformistas tomaron fuerza y el análisis más radical se enfocaba en los autores clásicos de los movimientos obrero y campesino, además del tema agrario. En el caso de las críticas, los autores dependentistas desde un enfoque marxista profundizaron las mismas y establecieron los límites que este modelo capitalista tenía.

Por su parte, en América Central la tradición analítica comenzó según Rovira Mas entre 1944 y 1979. Esta inició con la revolución de Guatemala en el periodo 1944-1954 y una breve ola democratizadora que culminó con la caída del régimen de Anastasio Somoza y sus descendientes en Nicaragua en 1979. Las dos cuestiones políticas primordiales abordadas en el comienzo de este período fueron la democracia y el desarrollo, ambas con vigencia efímera (Rovira Mas, 2008). En estos temas se destacan las obras de Torres Rivas (2013) y Ayala (2016), entre otros.

Así mismo, los cambios vertiginosos que acaecían en la región permitieron a varios autores hondureños explicar en buena medida algunos de los contratiempos existentes, en especial la fragmentación cultural y territorial; se reconocen los aportes de Meza (1981), Carías (2007), Sierra (1998) y Barahona (2005). En el campo sociológico y del trabajo social resaltan los aportes de Murga Frassinetti (1977), Molina Chocano (1986) y Posas (1981b), entre otros, así como Del Cid (2019) y De Morais (1975) en lo económico y agrario.

En ese sentido, desde la economía, la historia y la sociología, se hicieron esfuerzos para comprender las transformaciones agrarias y el tránsito de una sociedad eminentemente rural a la industrialización incipiente. Un empuje, en este sentido, lo brindó el académico brasileño De Morais, que en la década de 1970 se radicó en Honduras para apoyar el proceso de Reforma Agraria.

2. El modelo de sustitución de importaciones en Honduras

Como apunta Roll (2020), la Gran Depresión o crisis económica capitalista que estalló en octubre de 1929 vino a debilitar aún más el colapsado modelo capitalista primario exportador, que fue impuesto en la región a través de los procesos de reforma liberal a fines del

siglo XIX. Este modelo promovía la extrema dependencia de los países latinoamericanos especializados en la producción agraria o minera, por medio de la inserción de la región a enclaves transnacionales orientados al monocultivo o especialización de productos básicos para la exportación a Estados Unidos y Europa, como lo señala Villar (2010).

La aplicación de ese modelo, sustentado por la teoría de las ventajas comparativas y enmarcado en la división internacional del trabajo, produjo altos niveles de desigualdad en la región, lo que a su vez generó el masivo descontento de los sectores más empobrecidos y en menor medida de la burguesía nacional; tal fue el ejemplo de la revolución mexicana y los estallidos sociales en Nicaragua, El Salvador y Honduras, encabezados por campesinos y obreros agrícolas, entre otros actores.

El desgaste interno del modelo primario exportador, aunado a la crisis económica capitalista, así como el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y la segunda guerra mundial, entre otros hitos históricos, crearon las condiciones objetivas para que a partir de 1945 los sectores dominantes que triunfaron en el conflicto bélico, replantearan su estrategia de dominación y absorción de capital en las regiones consideradas a partir de entonces como subdesarrolladas. Es así como en América Latina la CEPAL plantea la superación del subdesarrollo a partir del modelo de sustitución de importaciones o industrialización «hacia adentro» de los países de la región, en la década de 1950, en un contexto caracterizado por la necesidad de impulsar el crecimiento económico y la independencia industrial. La región había experimentado un periodo de estabilidad y crecimiento en la década anterior, pero a partir de la década de 1950, se enfrentó a una serie de desafíos económicos y políticos, incluyendo la dependencia de las exportaciones de productos básicos hacia los países capitalistas del centro y la falta de diversificación de la economía en cuanto a la producción de bienes de consumo interno.

En este contexto, los países de América Latina buscaron promover el desarrollo industrial a través del nuevo modelo, que se basaba en la protección a la producción nacional a través de políticas proteccionistas como aranceles a la importación y la inversión en infraestructura y sectores industriales clave. Este enfoque se centró en el papel dominante del sector público en la economía y buscó fomentar el crecimiento económico a través de la sustitución de importaciones y la diversificación económica.

En Honduras, desde la crisis de 1929, según Villar (2010) se suscitaron revueltas en las plantaciones bananeras manejadas por las empresas transnacionales de capital norteamericano, las que a

manera de enclave controlaban grandes extensiones de tierras y sectores estratégicos del país. Esta burguesía transnacional controlaba la esfera política a través de un modelo bipartidista; para la época era común la rotación de uno u otro partido en el poder, sin embargo, ambos partidos respondían a los intereses de las corporaciones transnacionales.

Para Barahona (2005), la crisis económica en Honduras condujo a una crisis política, que en 1933 llevó a las élites nacionales y transnacionales a tomar la decisión, al igual que en el resto de la región, de pactar con los sectores más conservadores del país e instrumentalizar los limitados procesos democráticos para colocar un gobierno autoritario que perduró hasta 1949 en el control del Estado.

De la misma forma que en el resto de la región, en Honduras el cambio generacional, la presión social y las fuerzas externas clamaban por refrescar la dinámica de control, de tal manera que se dio una transición pacífica de cambio de gobierno a otra persona, pero con los mismos intereses de clase y perteneciente al mismo sector elitista transnacional.

Los impactos de la implementación de ese nuevo modelo fueron significativos en el país a partir de la década de 1950 y 1960, impulsando el crecimiento económico y una incipiente industrialización. En el caso hondureño, se configuró una infraestructura económica en la que se fundó el Banco Central de Honduras (BCH) y una política monetaria; se impulsó desde el Estado la conformación de una burguesía nacional capaz de dinamizar las fuerzas productivas, entre otras transformaciones.

Por otra parte, este cambio a la industrialización enfrentó desafíos y limitaciones a largo plazo, incluyendo la falta de eficiencia en la producción y la dependencia de la inversión pública, así como el sobreendeudamiento estatal. Así pues, este proceso surgió en un momento de necesidad de impulsar el crecimiento económico y la independencia industrial en América Latina y por ende Honduras. Otras contradicciones manifiestas las constituyeron la formación de un proletariado agrícola y una clase media urbana que exigían mejores condiciones laborales y una mayor participación política y social.

En palabras de Barahona (2005), este escenario alcanzó su cúspide en mayo de 1954 con la gran huelga general de trabajadores bananeros. Este hito histórico conllevó a que los posteriores gobiernos -a partir de la fecha- tomasen una postura reformista, brindando la oportunidad de acceder a derechos como el voto de las mujeres, el Código de Trabajo, el salario mínimo, el derecho a la sindicalización y el acceso a la seguridad social, entre otros. De hecho, para

contrarrestar el avance de los sectores populares, en 1956 con el apoyo de los Estados Unidos, se fundan las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes a partir de la fecha jugarían un rol importante en el devenir del país.

Algo importante que no debe omitirse en el presente análisis, es que el mismo toma mayor vigor por el contexto de la Guerra Fría entre las dos potencias hegemónicas. Por un lado, el bloque capitalista impulsado por Estados Unidos y por el otro el socialista encabezado por la extinta Unión Soviética; ambos países se encontraban en disputa de su zona de influencia. En 1959 y bajo este contexto triunfa la revolución cubana, que se proclama como socialista e impulsa procesos de nacionalización de los medios de producción clave y genera un proceso de planificación centralizada desde el Estado, subordinando a un segundo plano al mercado. Esta experiencia revolucionaria de la clase trabajadora fue atacada de inmediato por los sectores capitalistas internacionales a través de bloqueos económicos y militares, pero al mismo tiempo «suavizó» las estrategias de control y dominación sobre el resto de la región, abriendo oportunidades a los sectores trabajadores de gozar de algunos derechos y beneficios sociales, como estrategia preventiva al descontento popular.

Entre los mecanismos de compensación establecidos en el país se puede mencionar la Reforma Agraria. Para Posas (1981a), esta estrategia fue interpretada como una forma de canalización del descontento campesino por su falta de acceso a la tierra, así mismo los insertó en la lógica capitalista al igual que ocurrió con la creciente aparición de obreros y trabajadores, además de los sectores profesionales que en gran medida configuraron los estratos medios con capacidad de consumo y ahorro que impulsarían el creciente mercado interno en el país.

Esta nueva dinámica en la que sectores subalternos tenían acceso a derechos sociales, laborales, salud y educación, entre otros; parafraseando a Salomón (2010), fue dirigida a partir de 1963, al igual que en buena parte de la región, por regímenes militares. Estos gobiernos controlados por las milicias respondían directamente a los intereses estadounidenses, quienes por ejemplo en el caso hondureño se prolongaron desde ese año hasta 1981. En consecuencia, las políticas sociales y económicas iban encaminadas a la constitución de una burguesía nacional en la que tanto militares como empresarios controlaban los recursos estatales y al mismo tiempo frenaban la articulación obrera y campesina que podrían aspirar a la conquista del poder político del país.

Así mismo, la incipiente reforma agraria hondureña fue cautelosa con el otorgamiento de tierras ociosas bajo el control transnacional, enfocándose de esa manera en asignar tierras ejidales a campesinos quienes eran movilizados de un extremo del país a la zona norte. Para De Morais (1975), lo sobresaliente de este proceso es que los mismos pudieron organizarse en cooperativas y empresas asociativas bajo la dinámica capitalista de producción para la exportación. La mayoría de estas iniciativas fracasaron a mediano plazo, debido a diversos factores internos, pero sobre todo al sabotaje externo por parte de los militares en el poder, políticos e intereses transnacionales.

Por su parte, el Estado constituyó la Comisión Nacional de Inversiones (CONADI), con ella a través de endeudamiento externo se buscaba impulsar la industrialización interna. En ese sentido, Meza (2018) postula que surgieron iniciativas estatales en la producción e industrialización de productos lácteos, cemento, vivienda, alimentos, entre otros. En paralelo se financiaba al sector privado para este invirtiera también en la producción, siendo así que una incipiente clase burguesa nacional se dedicaría a la producción de bienes de consumo y servicios con el respaldo fiduciario del Estado.

Durante la década de 1960 fueron palpables algunos avances en materia económica y social en la región, tanto así que se promovió la conformación de un mercado común centroamericano, entrando en funcionamiento para 1961 el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI). El crecimiento era paulatino, los préstamos fluían y a su vez la corrupción; no obstante, según Meza (2018) los paliativos reformistas no lograron reducir las desigualdades entre las personas del campo y la ciudad. Así pues, la burguesía emergente se plegó a los intereses transnacionales del capital y generaron contubernio con los militares y políticos gobernantes a lo largo de la región.

Esta crisis de legitimación, en el caso hondureño, llegó a su cúspide en 1969 cuando los gobiernos dictatoriales y la burguesía nacionalista de Honduras y El Salvador alcanzaron altos niveles de conflictividad en sus intereses acabando en una guerra entre ambos países. Las contradicciones producidas por el descontento obrero y campesino fueron controladas medianamente en Honduras con el llamado a la conformación de un Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, El Salvador, Guatemala y Nicaragua desembocaron en guerras civiles que procuraban, como plantea Torres Rivas (2013), procesos democratizadores con acceso al poder a los sectores marginados de cada país.

En Honduras se puede señalar el plan reformista del período 1973-1975, contentivo de una serie de medidas de corto, mediano y largo

plazo. Esta fue la carta de presentación del gobierno reformista liderado por el general Oswaldo López Arellano, que representó un gobierno eminentemente militar. Este plan se fundamentó en tres ejes centrales de orientación de la política económica: 1) Transformación del sector agrario-forestal; 2) una visión capitalista del desarrollismo en oposición a concepciones economicistas del crecimiento y 3) soberanía en la toma de decisiones (Hernández, 1992).

Así mismo, Meza (2018) apunta que el despilfarro de los recursos procedentes del endeudamiento externo era latente y hasta 1981 los militares se perpetuaron en el poder político del país. Al final de su gobierno ya eran visibles los altos niveles de corrupción y los organismos de crédito comenzaban a realizar los correspondientes cobros de intereses y capitales. Por otro lado, la guerra fría alcanzaba altos niveles de intensidad en la región con guerras civiles y por ende los intereses geopolíticos estadounidenses y del capital transnacional presentes en Honduras orillaron a las Fuerzas Armadas y políticos a replantear su estrategia de control creando una Doctrina de Seguridad Nacional.

De esta manera, la década de 1980, según Barahona (2005) se convierte en la década perdida para América Latina y por ende Honduras; en este país los gobiernos civiles que alcanzaron el poder por la vía electoral son tutelados por los militares, quienes en definitiva tomaban las decisiones económicas y políticas. Esto conllevó, según el Comisionado de Derechos Humanos (2002), a que 187 personas hasta la fecha fueran declaradas como desaparecidas y otras asesinadas bajo este régimen en apariencia democrático. Al mismo tiempo, los políticos debían atender las demandas de los organismos de financiamiento, quienes solicitaban su dinero y a la vez encubrían algunos de los empresarios formados que se agenciaron tales fondos.

De este modo, el modelo desarrollista implementado en Honduras no alcanzó a despegar, aunque permitió la configuración de capas medias urbanas que accedieron a la educación formal; además perpetuó las desigualdades en el campo a pesar de los intentos reformistas. Por ende, la década 1990 recibió un país con mediana estabilidad política, sumido en la pobreza, con altos niveles de corrupción, dependencia y extremadamente endeudado, al igual que instituciones frágiles, poca infraestructura y andamiaje estatal, por tanto el país se encontraba a merced de los intereses del capital transnacional y la indiferencia de los políticos y la burguesía nacional.

3. Desarrollismo en Honduras y sus actores

Tomando en consideración las ideas precedentes, es factible mencionar varios actores clave para el funcionamiento del modelo de

desarrollo «hacia adentro». Uno de los principales actores es el Estado, ya que fue el encargado de proveer la regulación y los incentivos necesarios para promover la industrialización, generando los recursos para el surgimiento y sostenimiento de la élite empresarial, que lideró la inversión y la expansión industrial en la región. A estos se agrega las capas políticas y militares que controlaban el aparato estatal y productivo.

Estos actores internos fueron cobijados por otros externos, resaltando el rol de los países centrales, especialmente el de los Estados Unidos, ya que proporcionaron en buena medida financiamiento, asesoría militar y política, además de transferencia tecnológica y formación profesional a los países de la región. En paralelo y de manera más global es necesario mencionar a los organismos de financiamiento internacional que brindaron vía préstamos la financiación y asesoría de la aplicación del modelo, resaltando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Meza (1981), como actores subalternos que en buena medida legitimaron su funcionamiento, aunque en otros casos se resistieron y procuraron la transformación radical, las organizaciones sindicales lucharon por mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. Sin embargo, también frenaron a otras que aspiraban cambios más profundos dentro del sistema, surgiendo a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, un sindicalismo de derecha prosistema de corte liberal, al igual que el de tendencia social cristiana y otro de izquierda de corte marxista, lo que en definitiva tributó en divisionismo dentro de la clase trabajadora.

De igual forma, de acuerdo con Posas (1981b), sucedió con el sector campesino, las tendencias liberales y revolucionarias se marcaron al momento de acceder al proceso de reforma agraria; esta fue inconclusa en casi toda la región y benefició a los terratenientes, que a su vez pertenecían a los sectores favorecidos de su aplicación, fueran estos políticos, militares o empresarios. En consecuencia, según Del Cid (2019), el área rural fue la menos favorecida mostrando una amplia brecha de desigualdades, consolidando así al campesinado como el sector más desfavorecido y que en varios países optó por la vía armada para obtener algunos beneficios, como es el caso de Colombia, El Salvador, Guatemala, entre otros.

Previamente se mencionaron a las organizaciones sindicales, pero fueron los trabajadores urbanos y obreros agrícolas quienes también desempeñaron un papel esencial para el funcionamiento y avance de las medidas desarrollistas. Estos, según Murga Frassinetti (1977), con su fuerza de trabajo generaron una dinámica laboral con

base en emprendimientos por cuenta propia o inserción en el mercado de trabajo. De hecho, conjuntamente al sector cooperativo y asociado a empresas campesinas configuraron una capa media a la que se agregaron los profesionales y funcionarios estatales.

A manera de síntesis, es necesario apuntar que a nivel político, en el periodo entre 1949 y 1989, fue sobresaliente el papel dominante del sector público; en este aspecto resalta el rol planificador del Estado sobre la economía, siendo el principal actor en los procesos de inversión y promoción de la industria nacional. A nivel social, se intentó aplicar un enfoque keynesiano, basado en los principios de inversión pública y gasto gubernamental para impulsar el crecimiento económico, lo que favoreció el surgimiento de una clase media, el impulso del proceso de reforma agraria que constituyó un pacto social donde los trabajadores obtuvieron derechos laborales y sociales.

A nivel económico, se priorizó la protección a la producción nacional, mediante aranceles y barreras a las importaciones, esto buscó fomentar la industria nacional y reducir la dependencia de las importaciones. Además, se fomentó la inversión en infraestructura y sectores clave, destacándose los sectores industriales, incluyendo la construcción de puentes, carreteras, e infraestructuras públicas destinadas a la producción de alimentos y energía, entre otras. A su vez es de hacer notar la ineficiencia en la producción y la dependencia de la inversión pública, así como la corrupción y sobreendeudamiento externo.

Al comparar estas acotaciones generales con el caso latinoamericano, las mismas fueron observadas de forma parcial. De hecho, Posas y Navarro (2013) apuntan que el modelo como tal, se instaura en el país con unos 20 años de retraso, con respecto al resto de América Latina. Posterior al fin de la dictadura de Carías 1933-1949, el Estado hondureño erigió el marco institucional para la aplicación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). De esta manera, en la década de 1950 en el país, se creó el Banco Central de Honduras (BCH), el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Banco Nacional de Fomento (BANAFON) y la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI).

Al igual, se instaló el andamiaje legal para generar las condiciones de funcionamiento económico de carácter proteccionista; también según Martínez (2003) se creó el Código de Trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Leyes de Reforma Agraria y Sindicalización Obligatoria. Estos últimos fueron propiciados por la gesta obrera de 1954, en el que los obreros agrícolas de las

corporaciones transnacionales bananeras desarrollaron la gran huelga general; además se instauró la autonomía universitaria impulsada por el movimiento estudiantil en 1957 y el derecho al voto por parte de las mujeres sufragistas en 1955.

4. Crisis de la deuda e implementación del neoliberalismo

Luego de este recorrido sobre las críticas de la implementación del desarrollismo en la región y en consecuente Honduras, como soporte analítico de este apartado, se destaca el concepto de conflicto social de Dahrendorf, abordado en su obra *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial de 1970*, para quien, en síntesis, es un fenómeno inherente a la sociedad, producto de la desigual distribución del poder y la autoridad; a su vez este conflicto puede ser un motor del cambio social y un elemento funcional para la sociedad si se gestiona de forma adecuada. Para este autor, el elemento central en la teoría del conflicto es el poder, siendo la distribución desigual del poder y la autoridad dentro de las asociaciones imperativamente coordinadas, la fuente principal del conflicto social (Kerbo, 2003) En ese sentido, se puede afirmar que la transición al neoliberalismo generó conflictividad en muchos niveles, comenzando desde los sectores transnacionales quienes a través de financiamiento externo por medio del BID, FMI y BCIE, entre otros, penetraron la inversión nacional en forma de endeudamiento.

Al llevarse a cabo el paso de regímenes militares a gobiernos democráticos, estos últimos se encontraron con una deuda externa impagable; en el caso de Honduras para 1990 rondaba los 3 mil millones de dólares americanos. Con el proceso de reconstrucción producto de los desastres provocados por el huracán Mitch, para 1999 la deuda externa alcanzó los 4 mil millones de dólares americanos, llegando a su punto más alto en diciembre de 2004, con 5 mil 214. 045 millones de dólares americanos (Secretaría de Finanzas, 2007), lo que permitió a estos sectores capitalistas imponer su agenda a los políticos que administraban al Estado.

A nivel interno, para implementar la agenda transnacional de privatizaciones y reducción del tamaño del Estado, estos políticos tuvieron que desarticular en buena medida los avances sociales y económicos que los sectores populares de la clase proletaria habían obtenido décadas atrás. Así, Sosa (2010) señala que se implementaron cambios legislativos encaminados a modificar el régimen de tenencia de la tierra, la flexibilización y desregulación laboral, devaluación de la moneda y otros, que atacaron directamente a los sectores organizados

tanto en el campo como en la ciudad.

Por su parte, Martínez Estrada (2024) plantea que todo esto ocurrió en paralelo a la firma de los tratados de paz en la región centroamericana. Para 1989, con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética, varios de los procesos bélicos llegaron a su fin por medio de acuerdos pactados entre las élites nacionales y los grupos insurgentes, destacando los Acuerdos de Esquipulas en 1990, las elecciones en Nicaragua y el fin de la guerra en El Salvador en 1992 y de Guatemala en 1995. Todo esto en parte dejaba a una región empobrecida por la deuda externa, devastada por la guerra, fragmentada por la migración y poco democratizada por el tutelaje militar.

Esta situación de vulnerabilidad y frágil institucionalidad dio pie a que los organismos de financiamiento internacional y la clase capitalista transnacionalizada, tal como lo menciona Robinson (2011), impusieran su agenda económica implementando la aplicación del modelo neoliberal y sus medidas privatizadoras a partir de la década de 1990 en el siglo XX. Esto conllevó la apertura de la inversión extranjera en los sectores agroindustriales, manufacturero, turismo a gran escala, minería, producción energética e infraestructura, conduciendo por una parte a mejorar la situación de derechos humanos, pero a su vez sentando las bases de un proceso de securitización de la vida cotidiana y política.

Durante la década de 1990, en Honduras las élites económicas con sus aliados políticos construyeron un andamiaje en el que conjuntamente a las clases capitalistas transnacionalizadas se beneficiaron del Estado, esto a través de volver ineficiente y generar crisis en las empresas públicas que sobrevivieron a la transición del modelo. Para comprender los mecanismos utilizados para estas élites en detrimento de los sectores sociales, hay que observar la caída del sindicalismo y el debilitamiento de las organizaciones campesinas, así como la anexión de los sectores de izquierda al sistema político tradicional del país.

En ese sentido, Popitz (2019) parte de la idea de que el poder no es algo que se «tiene», sino que se ejerce en el marco de las relaciones sociales. El poder surge de la capacidad de los actores sociales para influir en el comportamiento de otros, ya sea a través de la persuasión, la negociación, la imposición o incluso la violencia. Esta capacidad no se distribuye de manera uniforme, sino que se configura a través de las estructuras sociales, las posiciones que ocupan los individuos y los recursos a los que tienen acceso.

Es así como al implementar una política agresiva antisindical y divisionista del campesinado, cooptando líderes o formando paralelas, el Estado transnacionalizado generó relaciones por una parte de clientelismo ante los gobiernos y por otra de destrucción organizacional. Este período, según Sosa (2013), se caracterizó por una débil respuesta social a la implementación de las medidas neoliberales, lo que allanó el camino a las élites nacionales en contubernio con sus pares transnacionales para eliminar los pocos vestigios del Estado desarrollista.

A pesar del crecimiento económico a nivel macro que se mostraba, los niveles de empobrecimiento y las desigualdades también crecían de forma exponencial. A su vez, la migración del campo a la ciudad y el éxodo de hondureños hacia Estados Unidos se aceleró, al igual que la violencia al interior del país se evidenció con el surgimiento de las maras y otras pandillas en los polos urbanos que atrajeron grandes contingentes poblacionales para trabajar en las incipientes industrias manufactureras provocando la descampenización del área rural.

Este escenario fue el que en octubre de 1998 encontró el fenómeno natural denominado huracán Mitch. Este evento visto a poco más de 25 años de distancia plantea un punto de quiebre en la implementación de la segunda fase de las medidas neoliberales. La catástrofe económica y social originada por las severas inundaciones y destrucción de infraestructura y sembradíos permitió a las élites dominantes negociar con los organismos controlados por las clases capitalistas transnacionalizadas a través de la HYPC en 2005, una condonación del 64% de la deuda externa de los 5 mil 200 millones de dólares americanos (Cuevas, 2005, 21 de diciembre) estimados a esa fecha, lo que permitía a ambos sectores una limpieza de cara a la caótica situación de insolvencia en la que el país había quedado.

Además, le permitió a la clase capitalista transnacionalizada implementar con mayor facilidad su control sobre el Estado, volviéndolo en palabras de Robinson, un listado transnacionalizado. Por consecuente, pudiera decirse que las víctimas del huracán Mitch fueron mínimas, en comparación a los millones de empobrecidos provocados por este modelo que magnificó las desigualdades económicas al interior del país. También, promovió el divisionismo que aún es latente entre la clase obrera organizada y al interior del campesinado. A la par institucionalizó a la izquierda, hasta el punto de diluirla en los partidos liberales y conservadores.

Conclusiones

El modelo desarrollista en Honduras fue incipiente y no alcanzó a implementarse plenamente debido a factores endógenos y exógenos. Entre los primeros se pueden adjuntar los intereses de la burguesía transnacional que dominó la primera mitad del siglo XX representada por el enclave bananero, en contraposición a la emergente burguesía nacional representada por el empresariado de origen palestino, árabe y judío. Estos últimos fueron beneficiados por fondos estatales para impulsar empresas industriales y generar un mercado interno y consolidar una clase media con capacidad de consumo.

A nivel exógeno, los intereses del capitalismo global se vieron afectados por las medidas proteccionistas y el ascenso de la burguesía nacional. De esta manera, debido en buena medida al contexto político de la época, los regímenes militares que se sucedieron en el país optaron por endeudamiento externo, como mecanismo de agenciarse en beneplácito de la clase capitalista transnacionalizada, obteniendo legitimidad ante el mundo y generando relaciones clientelares al interior. Esto abrió las puertas a la implementación del neoliberalismo a fines del siglo XX y el retorno de las elites políticas tradicionales configuradas a imagen y semejanza de los sectores transnacionales al gobierno.

Por otra parte, estos cincuenta años con sus claroscuros evidenciaron algunos procesos organizativos exitosos que se convirtieron en la columna vertebral de las nuevas formas organizativas del siglo XXI. En la actualidad se evidencia una remilitarización de la sociedad hondureña; además el gobierno progresista que asumió en 2022 ha tratado de rescatar algunas de las enseñanzas positivas del desarrollismo al estilo Honduras. Sin embargo, al analizar este lapso se debe hacer de forma crítica y desde múltiples aristas para obtener una visión más amplia y comparativa del desarrollo en el país.

Referencias

- Ayala, R. (2016). *Marxismo y globalización capitalista*. Editorial Perro Azul .
- Barahona, M. (2005). *Honduras en el siglo XX: una síntesis histórica*. Editorial Guaymurás.
- Cariás, M. (2007). *De la patria del criollo a la patria compartida: una historia de Honduras*. Editorial Subirana.
- Comisionado de Derechos Humanos. (2002). *Los hechos hablan por si mismo*. Editorial Guaymurás.

- Cuevas, F. (2005, 21 de diciembre). Maduro agradece a FMI por eliminar 60% de deuda a Honduras. *Imtenespañol.com*
- De Morais, C. (1975). *La organización campesina y el desarrollo rural. Vol. 2.* Editorial PROCCARA.
- Del Cid, R. (2019). Aproximación al estudio de las clases sociales en el agro hondureño. En Ramón Moreno, *Antología del pensamiento crítico hondureño contemporáneo* (211-232). CLACSO.
- FOSDEH y ASONOG. (1998). *Encuentro continental de los países pobres severamente endeudados.* Tegucigalpa MDC.
- Furtado, C. (1966). Desarrollo y estancamiento en América Latina. *Desarrollo Económico*, 6(22/23), 191-225.
- Gunder Frank, A. (2005). *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina.* Siglo XXI Editores.
- Hernández, A. (1992). *Del reformismo al ajuste estructural.* Editorial Guaymuras.
- Kerbo, H. (2003). *Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, comparada y global.* McGraw-Hill, Madrid.
- Martínez, Y. (2003). *Pobreza, seguridad social y desarrollo humano en Honduras.* PNUD.
- Martínez Estrada, L. (2024). *Globalización, cambios políticos y conflictos fronterizos en Centroamérica. XXXIV Congreso Internacional Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS RD-Caribe*, Santo Domingo, República Dominicana.
- Meza, V. (1981). *Historia del movimiento obrero en Honduras.* Editorial Guaymuras.
- Meza, V. (2018). *El blindaje de la corrupción en Honduras: contexto, dimensiones, formas y mecanismos.* CEDOH.
- Molina Chocano, G. (1986). Breve balance de las ciencias sociales en Honduras. *Revista de Ciencias Sociales*, 41-47.
- Murga Frassinetti, A. (1977). Estado y burguesía industrial en Honduras. *Revista Mexicana de Sociología*, (39), 595-609.
- Popitz, H. (2019). *Fenómenos del poder.* Fondo de Cultura Económica.
- Posas, M. (1981a). *Conflictos agrarios y organización campesina: sobre los orígenes de las primeras organizaciones campesinas en Honduras.* Editorial Universitaria.

- Posas, M. (1981b). *El movimiento campesino hondureño: una perspectiva general*. Editorial Guaymuras.
- Posas, M. y Navarro, J. (2013). *Introducción a la Sociología*. Ed. Rubén Darío Paz.
- Prebisch, R. (1963). *Hacia una dinámica de desarrollo latinoamericana*. Fondo de Cultura Económica.
- Robinson, W. (2011). *Conflictos transnacionales: Centro América, cambio social y globalización*. UCA Editores.
- Roll, E. (2020). *Historia de las doctrinas económicas*. Fondo de Cultura Económica.
- Rovira Mas, J. (2008). El desarrollo de la sociología en Centroamérica: la promesa incumplida. *Revista de Ciencias Sociales*, (30), 65-74.
- Salomón, L. (2010). Partidos políticos y Fuerzas Armadas: ¿Árbitros, guardianes o subordinados al poder civil? En Víctor Meza et al., *Golpe de Estado: partidos, instituciones y cultura política* (125-144). CEDOH.
- Secretaría de Finanzas. (2007). *Informe de deuda pública: período enero-septiembre 2007*. Informe SEFIN, Departamento Análisis Económico y Financiero, Tegucigalpa MDC.Honduras
- Sierra, R. (1998). *Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 1998 - 1999*. PNUD.
- Sosa, E. (2010). *Honduras. Cronología del conflicto social*. CLACSO.
- Sosa, E. (2013). *Dinámica de la protesta en Honduras*. Editorial Guaymuras.
- Torres Rivas, E. (2013). *Revoluciones sin cambios revolucionarios*. F&G Editores.
- Villar, R. (2010). *Lealtad y rebeldía: La vida de Juan Pablo Wainwright*. Editorial Guaymuras.